

## EJECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Febrero 6 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Sonora, por el C. Nieves E. Acosta, contra la orden del Gobierno de aquel Estado, fecha 5 de Diciembre de 1871, mandándola ejecutar respectivamente á los CC. Prefectos de Hermosillo y del Distrito de Guaymas, y en cuya orden se dispone que el quejoso sea embarcado y puesto fuera del Estado como pernicioso á la tranquilidad pública, alegando que con este hecho se violan en su persona las garantías otorgadas en los arts. 16, 19 y 21 de la Constitución general de la República. Vistas las constancias de autos, y considerando: que el Gobierno de Sonora ha motivado la orden de 5 de Diciembre de 1871, en conocimiento de un delito que corresponde al fuero de los Tribunales comunes, imponiendo además una pena, como es la de destierro, sin que con el peticionario se hayan guardado las prevenciones constitucionales, la referida orden importa una violación expresa de las garantías aducidas por el C. Nieves Acosta en su escrito de demanda. Con tales fundamentos, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juzgado de Distrito de Sonora, cuya parte resolutive es como sigue: "La Justicia de la Union ampara y protege al C. Nieves E. Acosta, vecino de la ciudad de Hermosillo, contra la orden del Gobierno del Estado, de 5 de Diciembre último, que dispuso que el C. Prefecto de aquel Distrito remitiera á ese puerto al peticionario, y que el de este Distrito lo hiciera salir del Estado en el primer buque que se presentara."

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de Distrito que los elevó, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Anza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Febrero 21 de 1873.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato, por Mariano Hernandez y Rafael Meza, contra los procedimientos de la Jefatura política de Salamanca, por violación de garantías.

## PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito:

El Promotor fiscal en el juicio de amparo promovido por Mariano Hernandez y Rafael Meza, supuesto su estado, que es el de alegar de buena prueba, dice: que en el término probatorio á solicitud del representante de los quejosos, se presentó como prueba el acta que contra ellos intruyó el C. Gefe político de Pénjamo, considerándolos como saltadores y plagiarios.

El Promotor fiscal ha examinado las constancias de esta acta, y en ella los delitos de asalto y plagio atribuidos en los quejosos, están demostrados no de una manera plena, sino por testigos á quienes en su mayor parte les constan los hechos que refieren, por haberlos oído ó ser de fama pública. Está probado que Hernandez y Meza pertenecieron á las filas de los sublevados en la gavilla que mandaba Estéban Bravo, y aunque se dice que esta gavilla per-

petró los delitos mas graves, no se especifican estos delitos ni mucho menos si los quejosos concurren á su perpetración.

La ley que suspendió las garantías individuales consignadas en el art. 13 de la Constitución para los salteadores y plagiarios, supone la prueba de la existencia del delito; y no estando demostrado de una manera plena que los quejosos están comprendidos en esta ley, el Promotor fiscal pide al Juzgado que sirva concederles el amparo de la Justicia de la Union que solicitan, por haberse violado en sus personas la garantía que otorga la Constitución en su art. 13.

Guanajuato, 19 de Noviembre de 1872.—*José Aguilar y Córdoba.*

SENTENCIA del ciudadano juez de Distrito.

Guanajuato, 2 de Diciembre de 1872.—Visto el presente juicio de amparo que promovieron Mariano Hernandez y Rafael Meza, contra la providencia decretada por el C. Jefe del Partido de Salamanca, en virtud de la cual y con violación de los artículos 13 y 18 del Código Fundamental de la República, según exponen los agraviados, permanecen estos en la prisión de la Penitenciaría de aquella Villa, estinguendo la condena que les fué impuesta como salteadores y plagiarios, no creyéndose reos de estos delitos, sino solamente del de sublevación, del cual se reputan amnistiados por la ley de 27 de Julio del corriente año; apareciendo que en el acta criminal que les instruyó el Jefe del Partido de Pénjamo, no constan probados con evidencia jurídica, los hechos de robo y plágio que se les imputan; porque, respecto del primero de los quejosos, todos los testimonios emitidos para fundar cargos, son de oídas y no tienen

Tomo III.—Parte II.

fuerza alguna en juicio, según las leyes vigentes; á lo que se agrega que en estos autos obra una superabundante información de testigos, en favor de la inocencia de ambos promoventes; y respecto del segundo, los únicos datos de culpabilidad que pudieran perjudicarle, consisten en las declaraciones de dos testigos que aseveran haber concurrido Meza á los asaltos de varias poblaciones; pero no designan el objeto de estos asaltos, ni afirman que en ellos haya habido muertes, heridas, robos ó plágios; considerando: que la ley de 9 de Abril de 1870, conforme á la cual fueron procesados los postulantes, no suspende las garantías de que ella misma habla, sino exclusivamente para los plagiarios y salteadores; de manera que esa suspensión es condicional y no debe tener efecto, si la condicion no se verifica, como sucede en el caso de que aquí se trata, en el cual no está justificada la cualidad de salteadores y plagiarios en las personas de los quejosos, quienes por tanto se hallan en el pleno goce de todas sus garantías individuales, y no han debido ser juzgados por el Jefe político de Pénjamo, que tiene el carácter de juez especial, ni con arreglo á la ley de 9 de Abril de 1870, que es privativa para determinados delincuentes, (art. 13 de la Constitución); considerando: que el delito que se les atribuye, siempre que sea debidamente probado, merece pena corporal; y en consecuencia, la prisión que están sufriendo los promoventes y la que sufran en lo sucesivo hasta la decisión legítima de su causa criminal, no es contraria al art. 18 del Código Político vigente; considerando: que no han designado, como lo previene el art. 4º de la ley de 20 de Enero de 1869, la facultad del Estado que conceptúan vulnerada ó restringida por la ley que les aplicó la autoridad política de Pénjamo; y por lo mismo no es procedente,

bajo este respecto, el recurso que han intentado; por estas consideraciones, y con apoyo de la citada ley de 20 de Enero de 1869, el C. juez de Distrito definitivamente fallando, declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á Mariano Hernandez y Rafael Meza, contra los procedimientos del C. Gefe del Partido de Pénjamo, en virtud de los cuales fueron juzgados y sentenciados los quejosos á la pena de muerte como salteadores y plagiarios, con infraccion del art. 13 del Pacto federal; cuya pena, conmutada en la de diez años de presidio, está ejecutando el C. Gefe del Partido de Salamanca. Notifiquese este fallo á las partes, publíquese en el Periódico oficial y, previa citacion, remítanse las diligencias á la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos mexicanos, para los efectos legales.

El C. juez de Distrito así lo decretó y firmó. Doy fé.—*Albino Torres.*—*Luis G. Medina.*

Es copia que certifico. Guanajuato, 7 de Diciembre de 1872.—*Luis G. Medina.*

#### EXECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Enero 29 de 1873.—Visto el recurso de amparo que en 19 de Setiembre último, promovieron en Guanajuato ante el juez de Distrito del Estado del mismo nombre, Mariano Hernandez y Rafael Meza, presos en la Penitenciaría de Salamanca, esponiendo: que no habiendo cometido mas delito que el de haberse sublevado contra el Supremo gobierno, tomando parte en la revolucion iniciada en San Luis Potosí, habian sido juzgados como salteadores y plagiarios por el Gefe político de Pénjamo el año de 1870, en cuya época es-

taba suspensa para los delincuentes de esa especie, la garantía que otorga el art. 13 de la Constitucion Federal: que como no hubiesen cometido los delitos que se les imputan, y solo se creen reos políticos, habian ocurrido en 17 de Agosto del año pasado, al Gefe político de Salamanca, pidiendo la libertad, con apoyo de la ley de amnistía expedida por el Presidente de la República, en 27 de Julio del mismo año, y que el Gefe político últimamente nombrado, se negó á admitir su justa peticion, alegando: que estaban sentenciados por otros delitos que no eran del órden político; cuya resolucion ataca sus derechos y los ha determinado á presentar su queja de haberse violado con los procedimientos referidos las garantías que les conceden los artículos 13 y 18 del Pacto Fundamental de la nacion, y á pedir el amparo que pretenden. Visto el informe del Gefe político del Partido de Salamanca, manifestando: que es cierto que los quejosos que se encuentran en la Penitenciaría de esa Villa estinguendo una condena, habian ocurrido acogidos á la ley de amnistía que citan, y pidiendo ser puestos en libertad; pero que no habia habido lugar á su solicitud, porque no existian los antecedentes relativos á su prision y sentencia, ni constaba que fuesen reos políticos. Visto el testimonio del acta que contiene el juicio á que sujetó el Gefe político de Pénjamo á Mariano Hernandez y Rafael Meza, como acusados de asalto y plágio: las demas pruebas que se han rendido: los pedimentos fiscales y la sentencia del juez de Distrito de Guanajuato, en la que concede la proteccion y amparo que han impetrado los quejosos, atento á que, de las constancias que obran en la acta referida del juicio seguido por la Gefatura de Pénjamo, no aparece legalmente probado que dichos quejosos hayan sido

salteadores y plagiarios, y antes bien existen justificantes que favorecen su conducta: á que en el concepto de no ser salteadores ni plagiarios, están fuera del alcance de la suspensión de garantías que establece la ley de 9 de Abril de 1870, que se les aplicó no pudiendo ser juzgados según ella, por resultar que, en tal supuesto, el Cefe político que juzgó es un juez especial, y la ley aplicada una ley privativa, ambas cosas prohibidas por el art. 13 Constitucional ya citado. En virtud de los fundamentos espuestos, que demuestran la violación de las garantías individuales otorgadas á los quejosos por el propio art. 13, y reservándose á la autoridad competente el conocimiento de si procede la amnistía que aquellos invocan, acogiéndose á la ley que la concede, con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve lo siguiente: Se confirma la sentencia del juez de Distrito de Guanajuato, pronunciada á 2 de Diciembre de 1872, declarando: que la Justicia de la Union ampara y protege á Mariano Hernandez y Rafael Meza, contra los procedimientos del C. Cefe político del Partido de Pénjamo, en virtud de los cuales fueron juzgados y sentenciados los quejosos á la pena de muerte como salteadores y plagiarios, con infracción del art. 13 del Pacto Federal, cuya pena los ha sido conmutada en la de diez años de presidio.

Devuélvase las actuaciones al Juzgado de Distrito que las elevó, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados-Unidos mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazón.—Juan J. de la Garza.*

—*José Arteaga.—Pedro Ordaz.—Ignacio Ramírez.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Auza.—Simón Gismán.—Luis Velazquez.—José García Ramírez.—Luis María Aguilar, secretario.*

Son copias que certifico. México, Febrero 18 de 1873.—*Lie. Agustín Peralta, oficial mayor.*

AMPARO promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato, por Antonio Vidal, contra el Cefe político de Santa Cruz, que lo juzgó y sentenció á la pena de muerte.

EDICTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

O. juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: Antonio Vidal, preso en la Penitenciaría de Salamanca, ha promovido el recurso de amparo contra la sentencia pronunciada por el C. Cefe político de Santa Cruz, condenándolo á la pena de muerte, en virtud de la ley de 18 de Mayo de 1871, fundado en que esta sentencia viola en su persona las garantías individuales consignadas en los arts. 13 y 20, frac. 5ª de la Constitución Federal. Acusa al mismo funcionario de que sin formar el acta que prescribe el art. 3º de la citada ley, mandó fusilarlo simulándose el acto de la ejecución, cargando las armas solamente con pólvora y lo suspendió de un árbol durante quince minutos, separando violentamente é infiriéndole golpes á la madre del quejoso del lugar en que se cometieron estos abusos en su persona.

Admitido el escrito de queja, después de haber sido ratificado por Antonio Vidal, el C. Cefe político de Santa Cruz, informó de conformidad con el art. 9º de la ley de 20 de Enero de 1869 que lo juzgó y sentenció según las facultades concedidas á las autoridades políticas en la ley de 18 de Mayo de 1871, como salteador, estando suspensas para esta cla-